



27
Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección General Jurídica.
Exp. 276/2014-O.

--- **VISTO.-** Se hace constar que el suscrito Mtro. FERNANDO RADILLO MARTÍNEZ SANDOVAL, mediante nombramiento de fecha 06 seis de diciembre de 2018, dos mil dieciocho, fue nombrado Director General Jurídico, por la LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO, Titular de la Contraloría del Estado, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 7 fracción VIII/y 50 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como lo previsto por el artículo 87 fracción I último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, tengo a bien avocarme al conocimiento del presente procedimiento sancionatorio.

ACUERDO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

--- Guadalajara, Jalisco, 25 veinticinco de febrero de 2019, dos mil diecinueve.

--- Se da cuenta del oficio SAJ/DGJ/204/2015 a través del cual se adjuntar resolución de la DUDA DE COMPETENCIA SGG/DC-01/2015, rubricada por el Mtro. Roberto López Lara de fecha 24 veinticuatro de julio del 2015; en cuyo punto único se estableció lo siguiente:

"...UNICO.- LA CONTRALORIA DEL ESTADO es la AUTORIDAD COMPETENTE para conocer el procedimiento sancionatorio en contra del C. CARLOS ARREOLA QUINTERO, por no presentar con oportunidad la declaración final de situación patrimonial dentro del término legal establecido en el artículo 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, obligación establecida en el artículo 6ª fracción XXVII de la citada Ley, y resolver lo conducente, conforme a las razones y fundamentos legales establecidos en los considerandos del presente acuerdo..." (sic).

--- En ese tenor de actuaciones se advierte el memorando 417/DGJ/DATSP/2014 de fecha 27 veintisiete de marzo del 2014, signado por el Lic. Juan Ramón Rodríguez González, entonces Director de Área Técnica y de Situación Patrimonial, mediante el cual informa que el C. CARLOS ARREOLA QUINTERO, causó baja el día 01 primero de enero del año 2014, dos mil catorce, al puesto que venía desempeñando como Auditor en la entonces nombrada Secretaría de Finanzas, quien resultó ser omiso en el cumplimiento de la presentación de su declaración final de situación patrimonial, dentro del término que establece el artículo 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; al que anexó la documentación soporte de la irregularidad, la que consistente en:

--- 1.- Copia certificada del formato de bajas del padrón de obligados a presentar la declaración de situación patrimonial, donde se refiere la baja del C. CARLOS ARREOLA QUINTERO, a partir del 01 primero de enero del año 2014, dos mil catorce, al cargo de Auditor en la entonces nombrada Secretaría de Finanzas.

--- Por consiguiente, al corresponder a la Contraloría del Estado, el control, registro y verificación de la situación patrimonial de los servidores públicos

ELABORÓ: Lic. Zuleika V. Rodríguez Balderas.

SUPERVISÓ: Lic. Francisco Javier Blas Godoy.



del Poder Ejecutivo, incluyendo al sector paraestatal, como lo dispone el artículo 94 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; sin embargo, es de tomar en consideración que la resolución de duda de competencia remitida por la Secretaría General de Gobierno, por lo que *resulta conducente entrar al estudio de la prescripción en los términos siguientes:* -----

--- Por principio de cuentas se debe de tomar en cuenta que el actuar irregular imputado al C. CARLOS VIREOLA QUINTERO, se da a partir de los 30 treinta días posteriores a la fecha de su baja de conformidad a lo que establece el artículo 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, esto es, a partir del 01 primero de febrero del año 2014, dos mil catorce, luego entonces, es evidente que ha transcurrido en demasía el término prescriptivo previsto en el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior es así, porque sin el ánimo de prejuzgar sobre la falta cometida, se hace referencia al precepto en examen, en los siguientes términos:

El dispositivo jurídico en cita prevé las facultades para hacer exigible la responsabilidad administrativa de los servidores públicos el que distingue los supuestos siguientes:

- a). - 30 treinta días hábiles para la imposición del apercibimiento y la amonestación.
- b). - 6 seis meses si el daño causado no excede de cincuenta veces el salario mínimo vigente en la zona metropolitana de Guadalajara o si la responsabilidad fuere leve y no estimable en dinero
- c). - **3 tres años con 3 tres meses en los demás casos.**

--- Ahora bien, en el asunto que nos ocupa la falta imputada al encasado se considera grave, toda vez que el legislador estatal, previó que con objeto de transparentar los ingresos lícitamente obtenidos por quienes se desempeñan en el servicio público, fueran objeto de revisión para evaluar la evolución patrimonial de los que se encuentran en tal supuesto, con objeto de detectar incrementos que no sean acordes con las percepciones lícitas de aquellos, por ende encuadra en el supuesto hipotético considerado en el inciso c), esto es, opera a partir de los 03 tres años con 03 tres meses, contados a partir del día siguiente de cometida la falta, razón por la cual la facultad de ésta Contraloría del Estado de Jalisco, para exigir la responsabilidad administrativa en el presente asunto **SE ENCUENTRA PRESCRITA** toda vez que como se puede observar a partir de la fecha en que cometió la falta la

ELABORÓ: Lic. Zuleika Rodríguez Balderas.

SUPERVISÓ: Lic. Francisco Javier Islas Godoy.



encausada esto es el día 01 primero de febrero del año 2014, dos mil catorce, al día de hoy han transcurrido 05 cinco años con 01 un mes, por ello es inconcuso que en éste caso, se actualizó el presupuesto establecido en el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco vigente al momento en que se suscitaron los actos denunciados, que a la letra señala lo siguiente:

*“Artículo 65. Las facultades para exigir la responsabilidad administrativa prescribirán en seis meses si el daño causado no excede de cincuenta veces el salario mínimo vigente en la zona metropolitana de Guadalajara o si la responsabilidad fuere leve y no estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiere cesado si fuere de carácter continuo. **En los demás casos, prescribirán en tres años con tres meses.** Prescribe en treinta días hábiles la atribución del superior jerárquico de la dependencia de que se trate, sobre la imposición del apercibimiento y la amonestación. La prescripción contará a partir del día siguiente del acto irregular a sancionar.*”

Los términos de prescripción se interrumpirán cuando se practique el procedimiento de investigación administrativa para comprobar la infracción y de ello queden constancias fehacientes, sin pasar del límite de tiempo establecido por el artículo 84 de esta ley.”

--- Aunado a lo expuesto con antelación, no es óbice mencionar que para esta Autoridad resulta la obligación de sujetarse a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al término de la prescripción otorgado para poder imponer sanciones por responsabilidades de los servidores públicos, criterios en los cuales el máximo Órgano de Justicia de la Nación ha sostenido que el **termino para la prescripción de la facultad sancionadora del Estado se interrumpe con la incoación del procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos, el cual se inicia con la notificación al incoado.** Circunstancia que según actuaciones aún no acontece.

Robustece lo anterior la Tesis Jurisprudencial I.13°.A.83 A, consultable en la página 1404, Tomo XX, Diciembre de 2004,



30

Época: Novena Época
Registro: 179820
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XX, Diciembre de 2004
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.130.A.83 A
Página: 1404

PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES PARA IMPONER SANCIONES POR RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SE INTERRUMPE AL EFECTUARSE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.



NO DE JALISCO
R EJECUTIVO
ORIA DEL ESTAI

Del estudio correlacionado de los artículos 64 y 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se desprende que **el término para la prescripción de la facultad sancionadora del Estado se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos que prevé el mencionado artículo 64, el cual se inicia con la notificación de la citación a una audiencia**, en la que se les harán saber las responsabilidades que se les imputan, así como su derecho a ofrecer pruebas; por otro lado, por notificación debe entenderse el hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso, de lo que se colige que su finalidad es, por una parte, que el servidor público tenga conocimiento de la instauración de ese procedimiento y, por otra, que se interrumpa el plazo de prescripción aludido, efectos que se perfeccionan en el momento en que éste se hace sabedor del procedimiento incoado en su contra. Por tanto, al perfeccionarse el objeto de la notificación con el conocimiento por parte del servidor público de la citación a la audiencia, debe considerarse que en ese momento se interrumpe el término de prescripción, y no a partir de que surta efectos la notificación, en términos de la legislación penal federal de aplicación supletoria en la materia, porque de estimarse así, se estaría disminuyendo el plazo para que la autoridad ejerza su función sancionadora.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

ELABORÓ: Lic. Zuleika A. Valdez

SUPERVISÓ: Lic. Francisco Javier Islas Godoy.



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección General Jurídica.
Exp. 276/2014-O.

Amparo en revisión 82/2004. Manuel Guillermo Berlanga Juárez y otro. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: Iván Guerrero Barón.

En este sentido se advierte que en el caso que nos ocupa, ha transcurrido en demasía el término previsto en el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, de 03 tres años con 03 tres meses, ya que el encausado a la fecha **no se le ha notificado de la incoación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que nos ocupa**, que dicho sea de paso fue por causas ajenas a esta autoridad y que han quedado descritas en líneas que anteceden; transcurriendo un plazo de 05 cinco años con 01 un mes, por lo cual se colige que la facultad por parte de esta autoridad para sancionar han **PRESCRITO**, y por ende resulta ocioso la continuidad del procedimiento que se estudia. Esto concatenado en lo previsto en las siguientes Jurisprudencias.

*Época: Novena Época
Registro: 163051
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 154/2010
Página: 1051*

PRESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE ALEGA EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE ACTUALIZÓ AQUELLA Y NO SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE HAYA OCUPADO DE TAL ASPECTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE ESTUDIE.

Conforme a los artículos 113 y 114 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federal y del Estado de Jalisco el servidor público no tiene la carga procesal de alegar la prescripción de la facultad sancionadora durante el procedimiento respectivo, en tanto que sólo constituye una posibilidad de defensa que tiene a su alcance, por lo que puede exponer dicho aspecto en el juicio de amparo, a pesar de que no lo haya realizado ante la autoridad administrativa, en cuyo caso el Juez de Distrito no debe calificar de inoperantes los conceptos de violación relativos, pero tampoco estudiar el fondo de la problemática, acorde con lo dispuesto en

ELABORÓ: Lic. Zuleika A. V. Rodríguez Balderas.

SUPERVISÓ: Lic. Francisco Javier Islas Godoy.



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

33



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección General Jurídica.
Exp. 276/2014-O.

el artículo 78 de la Ley de Amparo, sino conceder el amparo para el efecto de que la responsable examine esa cuestión.

Contradicción de tesis 218/2010: Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Décimo Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 8 de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 154/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del veinte de octubre de dos mil diez.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER JUDICIAL
ALTO TRIBUNAL



GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Época: Novena Época
Registro: 176639
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Noviembre de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 137/2005
Página: 53

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO SE INTERRUMPE CUANDO ANTE LA EXISTENCIA DE VICIOS FORMALES SON DECLARADOS NULOS EL ACTO QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO Y LA CITACIÓN CORRESPONDIENTE.

Conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 203/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 596, el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo previsto en el artículo 64 del indicado ordenamiento, mediante la citación al servidor público a la audiencia relativa; sin embargo, cuando ante la existencia de vicios formales dicho acto es declarado nulo, las consecuencias que produjo respecto del plazo de prescripción

ELABORÓ: Lic. Zuleika A. V. Rodríguez Balderas.

SUPERVISÓ: Lic. Francisco Javier Islas Godoy.



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO



Dirección General Jurídica.
Exp. 276/2014-O.

desaparecen, en tanto que el acuerdo de inicio y la citación para audiencia quedan reducidos a la nada jurídica, como si no hubieran existido, pues estimar lo contrario conllevaría eximir a las autoridades sancionadoras de sujetarse a las normas que regulan su actuación, en clara contravención al principio de legalidad que las rige. Por ende, es inconcuso que las consecuencias de la nulidad del acto de inicio del procedimiento sancionador debe soportarlas la autoridad, por ser quien transgredió el marco legal que rige su actuación y no el servidor público investigado que impugnó dicho acto y obtuvo resolución favorable. En ese sentido, si bien es cierto que el acto de inicio del procedimiento administrativo que resultó viciado evidencia la intención de las autoridades de ejercer su facultad sancionadora, también lo es que al declararse nulo no produce efecto legal alguno y, en consecuencia, para la interrupción del plazo de prescripción a que se refiere el mencionado artículo 78, fracción II, deberá considerarse, en su caso, la nueva citación al servidor público a la audiencia de ley respectiva.

NU



DE JALISCO
EJECUTIVO
A DEL ESTA/

Contradicción de tesis 95/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito (actualmente Segundo en Materias Administrativa y Civil del referido circuito). 30 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Tesis de jurisprudencia 137/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil cinco.

Nota: La tesis 2a./J. 203/2004 citada, aparece publicada con el rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO."

Aunado a lo anterior sirve para apoyar lo antes expuestos los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los cuales se transcriben para una mayor comprensión de las mismas:

ELABORÓ: Lic. Zuleika A. V. Rodríguez Balderas.

SUPERVISÓ: Lic. Francisco Javier Islas Godoy.



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

347



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección General Jurídica.
Exp. 276/2014-O.

“Época: Novena época. Registro: 165711 Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 200/2009. Página: 308.

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA HUBIERE CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE GUERRERO). Los artículos 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; 75 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, disponen que el plazo para que opere la prescripción para imponer sanciones a los servidores públicos inicia a partir del día siguiente al en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que ésta hubiere cesado, si fuese de carácter continuo, por lo que para computar el plazo de la prescripción es irrelevante la fecha en que las autoridades tuvieron conocimiento de la conducta infractora del servidor público a quien se pretende sancionar.

Contradicción de tesis 382/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Primero del Vigésimo Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas. Tesis de jurisprudencia 200/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de noviembre de dos mil nueve.” (sic)

“Época: Décima época. Registro: 2006420. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Administrativa. Tesis: VI.1o.A.68 A (10a). Página: 2122.

--- Razón por la cual, visto lo anteriormente expuesto y de manera fundada y motivada, **resulta procedente ordenar el archivo definitivo del presente asunto como totalmente concluido, al quedar acreditado que**

ELABORÓ: Lic. Zuleika V. Rodríguez Balderas.

SUPERVISÓ: Lic. Francisco Javier Islas Godoy.



35 36



las facultades para exigir la responsabilidad administrativa en contra del C. CARLOS ARREOLA QUINTERO, por parte de esta autoridad han quedado prescritas.

--- Así lo acordó y firma el Director General Jurídico de la Contraloría del Estado, de conformidad a lo previsto en los artículos 7 fracción VIII y 50 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; así como los arábigos 1 fracciones I, II, III, V y VII, 2, 3 fracción VIII, 4, 61 fracción XXVII, 62, 65, 67 fracción II, 68, 72, 87 fracción V, 96 fracción III; de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como 98 de citado ordenamiento legal vigente hasta el día 31 de diciembre de 2013; de conformidad a lo dispuesto por los artículos transitorios PRIMERO y SEGUNDO fracción I de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 26 veintiséis de septiembre del 2017 y vigente a partir el 27 veintisiete de septiembre del mismo año.

"El presente documento contiene información clasificada como RESERVADA de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los ordenamientos de la materia aplicables."

PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

Mtro. Fernando Radillo Martínez Sandoval.

Testigos de Asistencia

Lic. Carlos Alberto Higuera Fragozo.

Lic. Rosa Irene Sánchez Sánchez.

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco".